



**Señores**

**JUZGADO TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**

**E. S. D.**

<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	<b>REPARACIÓN DIRECTA</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	<b>ARMANDO SÁNCHEZ Y OTROS</b>
<b>DEMANDADO:</b>	<b>MUNICIPIO DE PEREIRA Y OTROS</b>
<b>RADICADO:</b>	<b>110013336037 2024 00150 00</b>
<b>ASUNTO:</b>	<b>CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA</b>

**DAVID EZERIGUER SÁNCHEZ**, identificado con número de cédula 1.088.299.275, domiciliado en el municipio de Pereira, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional N° 255.275 del C. S. de la Judicatura, en calidad de apoderado del **MUNICIPIO DE PEREIRA**, conforme al poder otorgado por **SANDRA ASTRID LÓPEZ GODOY**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.098.779, actuando en calidad de Secretaria Jurídica del Municipio de Pereira, nombrada mediante Decreto de Nombramiento No 000739 del 02 de abril de 2024 y Acta de Posesión N° 000646 de 03 de abril de 2024, facultada mediante Decreto de Delegación N° 010 del 04 de enero de 2024, me permito presentar ante ustedes **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** de la referencia, en los siguientes términos:

#### **I. OPORTUNIDAD PROCESAL:**

Mediante providencia del 8 DE AGOSTO DE 2024, notificada por correo electrónico el día 15 DE AGOSTO DE 2024, el despacho admitió la demanda de la referencia y ordenó correr traslado de la demanda a mi representado, el MUNICIPIO DE PEREIRA. A su vez, otorgó un término de 30 días para contestar la demanda, por tanto, nos encontramos



dentro de la oportunidad procesal oportuna para pronunciarnos y ejercer el derecho de defensa que le asiste a mi poderdante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 respecto a que la notificación personal por medios electrónicos se entiende surtida una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos, entonces, en el presente asunto la notificación se entiende surtida el 19 DE AGOSTO DE 2024 y, a partir del 20 DE AGOSTO DE 2024 comenzó a correr el término de traslado para contestar la demanda, por tanto, el término final para la contestación es el **1 DE OCTUBRE DE 2024**.

## **II. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO RESPECTO A LOS HECHOS:**

**FRENTE AL HECHO 2.1. ES PARCIALMENTE CIERTO**, sin embargo, tal y como consta en los antecedentes administrativos presentados la única habitante del lugar era la señora TERESA SÁNCHEZ JARAMILLO, pues se determinó que únicamente tenía adecuada una habitación para ella en el 2 piso de la vivienda y un baño ubicado en el 3 piso, dado que la vivienda estaba desplomada y a punto de colapsar y que su hijo, señor ARMANDO SÁNCHEZ únicamente actuaba como acompañante responsable de la adulta mayor en el proceso policivo adelantado. Así mismo, en trámite del PROCESO VERBAL ABREVIADO por AMENAZA DE RUINA EN INMUEBLE CON NOMENCLATURA CALLE 11 # 5 -16 – DEMOLICIÓN se decidió lo siguiente:



**IMPONER** la medida correctiva de **DEMOLICIÓN**, bajo las siguientes condiciones:

- **ORDENAR** el **DESALOJO** de la ciudadana TERESA SANCHEZ JARAMILLO, quien se identifica con: CC Nro: 24.891.845, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presente decisión. El cumplimiento de la medida se verificará y en caso de no haberse cumplido en el plazo establecido, se obligará a cumplirla a través, si es necesario, de los medios, medidas y procedimientos establecidos en la Ley 1801 de 2016, incluyendo el uso de la fuerza por parte del personal uniformado de la Policía Nacional.
- **INFORMAR** al señor ARMANDO SANCHEZ, quien se identifica con C.C N°: 10.060.255, que una vez hecho efectivo el desalojo, será él en su condición de hijo y estando obligado legalmente, quien deberá asumir la responsabilidad para con la señora TERESA SANCHEZ JARAMILLO, quien se identifica con: CC Nro: 24.891.845, en cuanto a vivienda y dando unas condiciones mínimas de vida digna. Máxime, cuando se rechazaron las alternativas brindadas por la administración. (Sin perjuicio de que se realicen, por parte de los ciudadanos, los trámites necesarios para acceder a aquellas alternativas ya mencionadas).
- **ORDENAR** al señor ARMANDO SANCHEZ, quien se identifica con C.C N°: 10.060.255, la ejecución de la demolición, en las condiciones descritas por el peritaje técnico a saber: Siendo inviable su reforzamiento estructural para dar cumplimiento a la Norma NSR-10, se recomienda la **DEMOLICIÓN** de los pisos dos y tres y el **REFORZAMIENTO** estructural del primer piso, el cual puede llegar a ser habitado por la propietaria.  
La demolición deberá ser llevada a cabo en forma manual por personal idóneo, cumpliendo la normatividad vigente.  
Dicha ejecución deberá iniciarse al día siguiente de hacerse efectivo el desalojo.  
Una vez verificado el cumplimiento o incumplimiento de la orden, en caso de incumplimiento, se dará aplicación al Parágrafo 3° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016: "Si el infractor o perturbador no cumple la orden de Policía o la medida correctiva, la autoridad de Policía competente, por intermedio de la entidad correspondiente, podrá ejecutarla a costa del obligado, si ello fuere posible. Los costos de la ejecución podrán cobrarse por la vía de la jurisdicción coactiva"

**ARCHIVAR** el expediente del despacho, una vez cumplida la medida correctiva.

Es importante indicar que en relación con la afirmación de que el señor **ARMANDO SÁNCHEZ** se encontraba ejerciendo posesión por más de 40 años no existe dentro del expediente administrativo o prueba aportada por la parte que permita determinar la veracidad de la indicada afirmación. De igual manera, es una afirmación que le corresponde probar al demandante; no obstante, es evidente el hecho de que la vivienda no tenía mantenimiento alguno; por lo cual puede distar de la realidad un verdadero ejercicio de posesión sobre una vivienda que finalmente fue demolida por el riesgo de ruina y el peligro que representaba a la sociedad.

**FRENTE AL HECHO 2.2. ES CIERTO.**



**FRENTE AL HECHO 2.3. ES PARCIALMENTE CIERTO**, me explico: Si bien se programó reunión para evaluar las medidas necesarias para la demolición del inmueble para el día 15 de marzo de 2022, la misma debió ser aplazada para que la secretaria de Infraestructura realizara visita al inmueble y se reuniera con la Dirección Operativa de Control Físico. Así mismo, se determinó la necesidad de generar un diagnóstico y evaluación de las condiciones para no generar afectaciones a otras viviendas o habitantes del sector.

El día 25 de marzo de 2022, una vez realizadas tomas las acciones necesarias para verificar la correcta demolición del inmueble, se indicó el miércoles 30 de marzo de 2022 como fecha para la ejecución de la medida correctiva de demolición.

Para el 30 de marzo de 2022, se realiza la diligencia, y se verificó lo siguiente:

Se evidencia que la ejecución de la medida correctiva de demolición ya está en desarrollo. Aparentemente debe haber varios días.

El despacho deja constancia de que efectivamente la orden ya estaba dada y lo que se encontraba pendiente era la ejecución en las condiciones dadas en la decisión del proceso y por las dependencias competentes: Secretaría de Infraestructura - Dirección operativa de Control Físico.

Encontrando entonces que la medida de demolición ya está en ejecución, se termina la diligencia por parte de la Inspección.

Es decir, a pesar de que la INSPECCIÓN 15 DE POLICIA DE PEREIRA se encontraba ejerciendo las acciones necesarias para la ejecución de la medida correctiva de demolición, esta fue adelantada sin habersele informado previamente al funcionario





Versión: 01

Fecha de vigencia: Enero 17 de 2024

delegado para tal función, quien, se reitera, se encontraba desarrollando sus funciones en cumplimiento de las obligaciones asignadas por la Ley.

Es importante indicar que respecto a las afirmaciones realizadas en el inciso final de este hecho respecto al contacto del Capitán Julián Botero con el INSPECTOR 15 DE POLICIA DE PEREIRA **no cuentan con fundamento alguno**, y trata de una interpretación errónea y malintencionada de la parte, puesto que no se encuentra prueba si quiera sumaria de las afirmaciones realizadas; además las declaraciones o a versiones libres son un medio de defensa más no un medio de prueba, ya que no se rinde bajo la gravedad de juramento.

**FRENTE AL HECHO 2.4. NO ES CIERTO**, tal y como se explicó anteriormente, se programó reunión para evaluar las medidas necesarias para la demolición del inmueble para el día 15 de marzo de 2022, la misma debió ser aplazada para que la Secretaria de Infraestructura realizará visita al inmueble y se reuniera con la Dirección Operativa de Control Físico. Así mismo, se determinó la necesidad de generar un diagnóstico y evaluación de las condiciones para no generar afectaciones a otras viviendas o habitantes del sector.

El día 25 de marzo de 2022, una vez realizadas tomas las acciones necesarias para verificar la correcta demolición del inmueble, se indicó el miércoles 30 de marzo de 2022 como fecha para la ejecución de la medida correctiva de demolición.

Para el 30 de marzo de 2022, se realiza la diligencia, y se verificó lo siguiente:



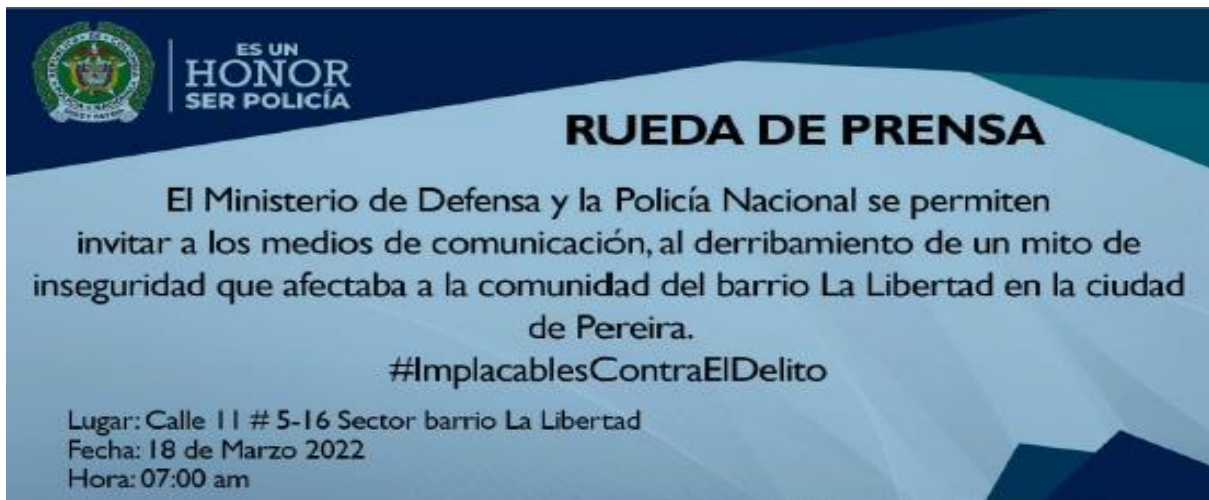
Se evidencia que la ejecución de la medida correctiva de demolición ya está en desarrollo. Aparentemente desde hace varios días.

El despacho deja constancia de que efectivamente la orden ya estaba dada y lo que se encontraba previendo era la ejecución en las condiciones dadas en la decisión del proceso y por las dependencias competentes: Secretaría de Infraestructura - Dirección operativa de Control Físico.

Encontrando entonces que la medida de demolición ya está en ejecución, se termina la diligencia por parte de la Inspección.

Es decir, a pesar de que la INSPECCIÓN 15 DE POLICIA DE PEREIRA se encontraba ejerciendo las acciones necesarias para la ejecución de la medida correctiva de demolición, esta fue adelantada sin habersele informado previamente al funcionario delegado para tal función, quien, se reitera, se encontraba desarrollando sus funciones en cumplimiento de las obligaciones asignadas por la Ley.

Así mismo, **NO ES CIERTO** que la ALCALDÍA DE PEREIRA citara a los medios de comunicación, pues, tal y como se observa en la prueba aportada, fueron EL MINISTERIO DE DEFENSA y la POLICÍA NACIONAL quienes invitaron a los medios a rueda de prensa:



**FRENTE AL HECHO 2.5. NO NOS CONSTA**, así mismo, no reposa en el expediente prueba de lo afirmado por los demandantes.

**FRENTE AL HECHO 2.6. NO NOS CONSTA**, dado que no reposa en el expediente prueba de lo afirmado por los demandantes. Así mismo, es importante indicar que, en todo caso son la POLICÍA NACIONAL y el MINISTERIO DE DEFENSA quienes deben responder por las afirmaciones de sus funcionarios.

**FRENTE AL HECHO 2.7. ES PARCIALMENTE CIERTO**; pues, como se desprende del expediente administrativo, la demolición del inmueble fue adelantada sin la presencia del INSPECTOR 15 DE PEREIRA, la autoridad competente para conocer el caso en concreto. Así mismo, es importante indicar que, en todo caso son la POLICÍA NACIONAL y el MINISTERIO DE DEFENSA quienes deben responder por las afirmaciones y conductas de sus funcionarios.

**FRENTE AL HECHO 2.8. NO NOS CONSTA**, el MUNICIPIO DE PEREIRA no cuenta con la obligación legal ni facultad normativa para conocer sobre los hechos indicados en el presente numeral. Así mismo, es importante resaltar que de acuerdo con la prueba



documental que se obtuvo del proceso administrativo por riesgo de ruina se logró determinar que la única persona que habitaba la vivienda era la señora TERESA.

De la prueba sumaria denominada como una denuncia penal interpuesta por uno de los demandantes no se puede desprender ningún elemento material probatorio que pueda corroborar lo afirmado en este hecho.

**FRENTE AL HECHO 2.9. ES PARCIALMENTE CIERTO;** me explicó: conforme las investigaciones realizadas, se determinó que el coronel Aníbal Villamizar, el subcomandante y el comandante operativo de la Policía de Pereira, así como el jefe de la investigación judicial de la DIJIN en Colombia y el jefe de comunicaciones estratégicas de la POLICÍA NACIONAL, quienes orquestaron la demolición de la falsa olla de drogas en Pereira, sin resultar implicado ningún funcionario o representante del MUNICIPIO DE PEREIRA.

Así mismo, se resalta que las investigaciones iniciaron debido a la insistencia del alcalde de la ciudad de Pereira en la época, el cual, ante la situación, actuó con premura y diligencia para llegar al fondo del asunto y determinar la existencia del engaño por parte de la POLICÍA NACIONAL y el MINISTERIO DE DEFENSA.

**FRENTE AL HECHO 2.10. ES CIERTO,** así se desprende de la prueba documental.

**FRENTE AL HECHO 2.11. NO NOS CONSTA,** el MUNICIPIO DE PEREIRA no cuenta con la obligación legal ni facultad normativa para conocer sobre los hechos indicados en el presente numeral. Así mismo, es importante indicar que la versión libre es un medio de defensa, más no de prueba, teniendo en cuenta que se rinde sin juramento.





**FRENTE AL HECHO 2.12. NO NOS CONSTA**, el MUNICIPIO DE PEREIRA no cuenta con la obligación legal ni facultad normativa para conocer sobre los hechos indicados en el presente numeral.

Así mismo, **NO ES CIERTO**, que el MUNICIPIO DE PEREIRA a través de su Inspector 15 de Policía hayan referido el bien, no existe prueba dentro del expediente que permita determinar lo afirmado por la parte demandante. Antes bien, se puede determinar con facilidad que el MUNICIPIO DE PEREIRA se encontraba realizando los trámites pertinentes para realizar la demolición del inmueble sin que existieran afectaciones a la adulta mayor que lo habitaba y a sus vecinos.

Por tanto, es muy grave la afirmación realizada puesto que no existe ninguna prueba que el inspector 15 de policía hubiera participado en esta situación; son afirmaciones descontextualizadas que extrae el demandante de la versión libre del mayor WILMAR DELGADO HERRERA, la cual, se itera, no tiene validez probatoria en el caso en particular.

**FRENTE AL HECHO 2.13. NO NOS CONSTA**, el MUNICIPIO DE PEREIRA no cuenta con la obligación legal ni facultad normativa para conocer sobre los hechos indicados en el presente numeral. Así mismo, es importante indicar que la versión libre es un medio de defensa, más no de prueba, teniendo en cuenta que se rinde sin juramento.

Se puede verificar dentro de los antecedentes administrativos que la demolición **no se realizó en presencia del Inspector 15 de Policía de Pereira**, quien se encontraba adelantando los trámites necesarios para realizar la ejecución de la orden de demolición por él expedida.



**FRENTE AL HECHO 2.14. NO NOS CONSTA**, el MUNICIPIO DE PEREIRA no cuenta con la obligación legal ni facultad normativa para conocer sobre los hechos indicados en el presente numeral.

Así mismo, se puede verificar dentro de los antecedentes administrativos que la demolición **no se realizó en presencia del Inspector 15 de Policía de Pereira**, quien se encontraba adelantando los trámites necesarios para realizar la ejecución de la orden de demolición por él expedida y es un hecho en donde no se atribuye responsabilidad alguna al MUNICIPIO DE PEREIRA.

**FRENTE AL HECHO 2.15. NO NOS CONSTA**, el MUNICIPIO DE PEREIRA no cuenta con la obligación legal ni facultad normativa para conocer sobre los hechos indicados en el presente numeral.

Así mismo, se puede verificar dentro de los antecedentes administrativos que la demolición **no se realizó en presencia del Inspector 15 de Policía de Pereira**, quien se encontraba adelantando los trámites necesarios para realizar la ejecución de la orden de demolición por él expedida y es un hecho en donde no se atribuye responsabilidad alguna al MUNICIPIO DE PEREIRA.

**FRENTE AL HECHO 2.16. ES PARCIALMENTE CIERTO**, respecto a la presión que generó el Alcalde del MUNICIPIO DE PEREIRA para que se generara la investigación y retiro del Comandante de Policía Metropolitana de Pereira; sin embargo, **NO ES CIERTO**, que este funcionario conocía la situación del inmueble, dado que, al tratarse de un proceso policivo, el funcionario competente para su conocimiento era el INSPECTOR 15 DE POLICÍA DE PEREIRA conforme el Código de Policía Nacional. De igual forma, el ALCALDE DE PEREIRA debido a sus múltiples ocupaciones no contaba



con la obligación o deber legal de estar enterado del proceso policivo que se adelantaba.

**FRENTE AL HECHO 2.17. NO NOS CONSTA**, el MUNICIPIO DE PEREIRA no cuenta con la obligación legal ni facultad normativa para conocer sobre los hechos indicados en el presente numeral.

**FRENTE AL HECHO 2.19. NO NOS CONSTA**, el MUNICIPIO DE PEREIRA no cuenta con la obligación legal ni facultad normativa para conocer sobre los hechos indicados en el presente numeral.

**FRENTE AL HECHO 2.20. NO TRATA DE UN HECHO**, es un requisito de procedibilidad de la demanda.

**FRENTE AL HECHO 2.21. NO TRATA DE UN HECHO**, es un requisito de procedibilidad de la demanda.

### **III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES**

**ME OPONGO A LA PROSPERIDAD DE LA TOTALIDAD DE LAS PRETENSIONES** en virtud de la inexistencia de fundamentos fácticos o jurídicos para su procedencia, dado que no existe fundamento fáctico o jurídico que permita determinar la responsabilidad de mi representado frente al petitorio de la demanda, por lo que las pretensiones invocadas por la parte demandante no cuentan con vocación de prosperar.

#### IV. FUNDAMENTOS DE DEFENSA

##### **TÍTULO DE IMPUTACIÓN APLICABLE AL CASO SUB EXAMINE: RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO: FALLA PROBADA DEL SERVICIO – MARCO JURÍDICO**

El régimen de responsabilidad extracontractual del Estado, encuentra su fundamento normativo en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Su desarrollo ha sido jurisprudencial y las Altas Cortes han indicado dos regímenes para el estudio de los casos concretos: el objetivo y el subjetivo, cuyo factor diferenciador es el estudio del elemento de la culpabilidad.

En este sentido, el Consejo de Estado por medio de sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en proceso con radicado 19001-23-31-000-2011-00434-01 (53977) con Magistrado Ponente JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ, indicó que el estudio en la acción de reparación directa bajo el título de la falla del servicio, debe observarse en cada caso en particular, y realizar el estudio adecuado de las circunstancias que rodean el caso. Se expresó en este sentido:

*En los eventos de responsabilidad del Estado por una supuesta inacción u omisión, esto es, que una entidad pública no actuó con el objeto de impedir la concreción de un daño antijurídico debiendo hacerlo, es preciso efectuar un análisis de imputación en el escenario de la falla del servicio, de manera que se verifique si el menoscabo cierto, personal y directo que se alega se funda en una relación causal (material y jurídica) con un contenido obligacional a cargo del Estado, teniendo en cuenta que la premisa normativa de la obligación que se reputa omitida puede hallarse tanto en la Constitución Política, la ley o el*





*reglamento, como también puede ser inherente al servicio o la actividad ejecutada por la misma administración.*

*Así, pueden identificarse omisiones en sentido laxo, referidas a la falta de ejecución de los cuidados necesarios para impedir la estructuración de hechos dañosos, que se ubiquen en el marco de lo previsible y lo evitable, cuando se ejerza una actividad, o identificarse omisiones en sentido estricto, comprendidas como la falta de ejecución de una conducta descrita en una norma, es decir, la infracción a un mandato normativo claro y específico que si se hubiera satisfecho habría impedido la ocurrencia del hecho dañoso, como es el caso del incumplimiento del deber de protección que las instituciones deben brindar a las personas por cuya noticia o condición se sabe que se encuentran en inminente peligro.*

*Es preciso recordar que, cuando se imputa un daño al Estado con fundamento en una omisión o inacción por su parte, el interesado se encuentra en el escenario de culpa probada y, en consecuencia, está llamado a aportar o, según el caso, solicitar el recaudo de los medios de convencimiento con los cuales se evidencie el supuesto de hecho que alega estructuró una falla en el servicio, pues de otro modo, al juez no le resta otra posibilidad que negar las pretensiones por la insatisfacción del onus probandi que le asiste al interesado, conforme con las previsiones del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (Subrayado fuera de texto).*

En el caso que nos ocupa, el demandante encuadró la responsabilidad a título de “falla del servicio”; es decir, bajo el régimen subjetivo, donde se debe demostrar la



conurrencia de los elementos que a continuación se indican para poder determinarse su configuración:

1. Una falta o falla del servicio de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. Este elemento ha sido el determinante para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado y, conforme lo ha indicado el Consejo de Estado<sup>1</sup>:

*si al Juez Administrativo le compete – por principio – una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. Las obligaciones que están a cargo del Estado – y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión -, han de mirarse en concreto, frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, a pesar de su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en aquellos supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como*

---

<sup>1</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION A Consejera ponente: HERNAN ANDRADE RINCON Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil doce (2012) Radicación número: 25000-23-26-000-1996-03282-01(20042) Actor: SOCIEDAD BANCO GANADERO S.A. Demandado: NACION - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Referencia: Apelación - Acción de Reparación Directa



*consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión de una autoridad pública en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada.*

En el caso en particular se tiene que se puede determinar que no existe material probatorio que permita determinar la falla del servicio alegada por la parte demandante en cabeza del MUNICIPIO DE PEREIRA; por el contrario, existen serios elementos que claramente el MUNICIPIO DE PEREIRA se encontraba adelantando los procedimientos correspondientes para generar el cumplimiento de sus deberes legales y que, de su actuación no se derivó una causa eficiente para la causación del supuesto daño alegado, tal y como se profundizará en el acápite correspondiente.

2. Un daño, lesión o perturbación a un bien jurídicamente protegido. Dicho daño debe ser cierto, determinado o determinable. En palabras del Consejo de Estado<sup>2</sup>:

*El daño constituye el primer elemento o supuesto de la responsabilidad, cuya inexistencia, o falta de prueba, hace inocuo el estudio de la imputación frente a la entidad demandada; esto es, ante la ausencia de daño se torna estéril*

---

<sup>2</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 05001-23-31-000-1991-06952-01(29590) Actor: MARIA GENI GONZALEZ Y OTROS Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Referencia: REPARACION DIRECTA



*cualquier otro análisis, comoquiera que es el umbral mismo de la responsabilidad extracontractual del Estado. Así las cosas, el daño se refiere a aquel evento en el cual se causa un detrimento o menoscabo, es decir, cuando se lesionan los intereses de una persona en cualquiera de sus órbitas, es “la ofensa o lesión de un derecho o de un bien jurídico cualquiera” aunque algunos autores han considerado que esta concepción debe incluir también la “amenaza o puesta en peligro del interés”, con lo cual se amplía su concepción a la “función preventiva” del mismo (...) la constatación de éste no es suficiente para que se proceda a su indemnización; en efecto, el daño debe ser cualificado para que sea relevante en el mundo jurídico. (Subrayado fuera de texto).*

El daño, para que sea indemnizable, debe encontrarse debidamente estructurado, siendo necesario que se demuestre que, primero, sea antijurídico, es decir, que la persona no tenga el deber de soportarlo; en segundo lugar, que el derecho se encuentre protegido por el ordenamiento jurídico y, en tercer lugar que, se pueda apreciar de manera material y jurídica. En el caso en particular la parte activa no logra demostrar el daño al bien jurídicamente protegido y no es posible determinar con claridad que sea cierto, determinado o determinable. Tal y como se demostrará a continuación, lo alegado por la parte actora carece de fundamento fáctico y jurídico, y respecto a este elemento es poco o nulo el material probatorio que puede dar lugar a la determinación de una lesión. Este tema se profundizará en el acápite correspondiente.

3. Una relación de causalidad entre la falta o la falla de la administración y el daño.

El nexo causal como vehículo como la relación jurídica que permite determinar





la responsabilidad de los entes en virtud del incumplimiento, omisión o extralimitación de las funciones de las autoridades y poder verificar que, de manera clara y concisa, fue la causa eficiente del daño sufrido.

En el caso en particular, se tiene que no existe nexo de causalidad entre la actuación del **MUNICIPIO DE PEREIRA** y los daños alegados por la parte activa, dado que se encuentra completamente descartado el primer elemento. Aun así se encontrasen probados el elemento de falla y daño, es menester afirmar que la actuación de mi representado no fue la causa eficiente de la lesión invocada, pues de los materiales allegados, se puede determinar claramente que las actuaciones de la POLICIA NACIONAL y el MINISTERIO DE DEFENSA, fueron las que generaron el inicio del presente proceso. Este tema se profundizará en el acápite correspondiente.

Bajo este lineamiento, se puede observar que en el caso que nos ocupa, se presentan los siguientes elementos que hacen imposible endilgar una responsabilidad del estado a título de falla del servicio conforme los elementos se desarrollarán conforme las siguientes:

### **I. EXCEPCIONES DE MERITO**

**Respecto al elemento de la falla del servicio.**

#### **IMPOSIBILIDAD JURIDICA DE ATRIBUIR FALLA EN EL SERVICIO EN CABEZA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.**

Como se indicó anteriormente, es un deber de la parte actora demostrar que la ocurrencia del hecho dañoso se generó como consecuencia de una falta o falla del servicio ya sea por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio.



En este sentido, el Consejo de Estado, por medio de Sentencia del veintitrés (23) de mayo de 2012, en proceso con radicado 17001-23-3-1000-1999-0909-01(22592), con Consejero Ponente ENRIQUE GIL BOTERO, definió el daño antijurídico de la siguiente manera:

*El daño antijurídico, entendido como la lesión a un derecho o bien jurídico o interés legítimo que los demandantes no están obligados a soportar, se encuentra acreditado con el registro civil de defunción de Jesús Antonio Hincapié García, en el que se indica que su deceso se produjo por “heridas sufridas por semoviente de forma accidental.”*

*Entonces, el daño entendido como la lesión a un interés protegido por el ordenamiento jurídico, y que la persona no está en el deber de tolerar, se estructura en el caso sub examine, a partir de la verificación de la muerte de Jesús Antonio Hincapié, toda vez que esta circunstancia constituye para los demandantes una afectación a sus derechos e intereses jurídicos, constitucional y legalmente protegidos.*

*Ahora bien, el hecho de que se encuentre establecido el daño no significa que el mismo de manera automática sea imputable fáctica y jurídicamente a la entidad demandada, motivo por el que la Sala abordará el respectivo análisis con miras a establecer si, en el caso concreto, se produjo la falla del servicio invocada en el libelo introductorio o, si, por el contrario, el resultado no deviene imputable o atribuible a la administración pública.*



Conforme la anterior lectura, resulta necesario que el juzgador valore en su conjunto los diferentes medios de prueba que integran el proceso y de esta manera, determinar si en el caso en concreto se encuentra probada la imputación fáctica y jurídica en cabeza de la parte demandada, o si, por el contrario, en el plano material la lesión o afectación negativa tuvo su génesis en un lamentable accidente que resultaría inimputable frente a la organización estatal.

En el caso que nos ocupa, se puede determinar que no existe material probatorio que permita determinar la falla del servicio alegada por la parte demandante en cabeza del MUNICIPIO DE PEREIRA; por el contrario, existen serios elementos que claramente el MUNICIPIO DE PEREIRA se encontraba adelantando los procedimientos correspondientes para generar el cumplimiento de sus deberes legales al:

1. Realizar visitas y generar conceptos técnico - jurídicos sobre la procedibilidad del establecimiento de medida sobre el bien inmueble ubicado en la CALLE 11 No. 5 -16 / CENTRO, PARQUE LA LIBERTAD y para la persona que habitaba en él.
2. Adelantar los procedimientos determinados por la Ley para el estudio de la situación, del evento, de la amenaza y la vulnerabilidad presentada sobre el bien inmueble ubicado en la CALLE 11 No. 5 -16 / CENTRO, PARQUE LA LIBERTAD y para la persona que habitaba en él, de la mano de la Constitución Política Nacional y el marco normativo aplicable al caso en particular.
3. Generar mecanismos de atención y seguimiento psicosocial de emergencia por posible colapso de la vivienda, brindando alternativas a la señora TERESA, propietaria del inmueble, adulta mayor de 89 años, cuyo único ingreso era su



pensión y quien habitaba su casa sola a pesar de su estado de vulnerabilidad, sin ayuda de su hijo o alguno de sus familiares y con dificultades de salud.

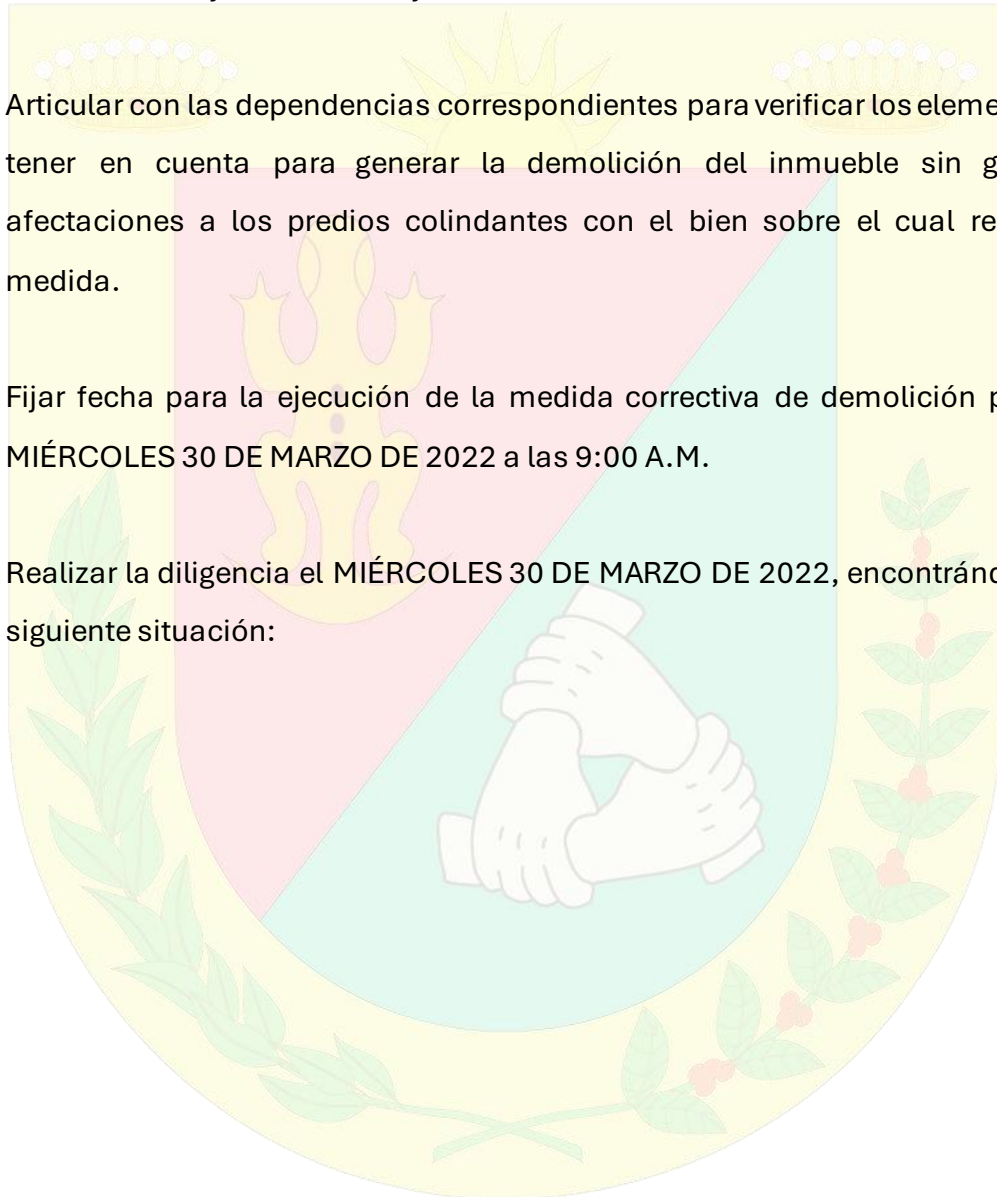
4. Determinar a través de los medios idóneos alternativas para evitar la demolición del inmueble, determinando su inviabilidad en virtud de que no fue posible el reforzamiento estructural.
5. Adelantar y culminar cada una de las etapas determinadas por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia para determinar las acciones necesarias frente al caso en concreto, permitiendo a las partes presentar pruebas y generar los pronunciamientos correspondientes.
6. Imponer medida correctiva de DEMOLICIÓN, bajo las siguientes condiciones:

- **ORDENAR** el **DESALOJO** de la ciudadana TERESA SANCHEZ JARAMILLO, quien se identifica con: CC Nro: 24.891.845, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presente decisión. El cumplimiento de la medida se verificará y en caso de no haberse cumplido en el plazo establecido, se obligará a cumplirla a través, si es necesario, de los medios, medidas y procedimientos establecidos en la Ley 1801 de 2016, incluyendo el uso de la fuerza por parte del personal uniformado de la Policía Nacional.
- **INFORMAR** al señor ARMANDO SANCHEZ, quien se identifica con C.C N°: 10.060.255, que una vez hecho efectivo el desalojo, será él en su condición de hijo y estando obligado legalmente, quien deberá asumir la responsabilidad para con la señora TERESA SANCHEZ JARAMILLO, quien se identifica con: CC Nro: 24.891.845, en cuanto a vivienda y dando unas condiciones mínimas de vida digna. Máxime, cuando se rechazaron las alternativas brindadas por la administración. (Sin perjuicio de que se realicen, por parte de los ciudadanos, los trámites necesarios para acceder a aquellas alternativas ya mencionadas).
- **ORDENAR** al señor ARMANDO SANCHEZ, quien se identifica con C.C N°: 10.060.255, la ejecución de la demolición, en las condiciones descritas por el peritaje técnico a saber: Siendo inviable su reforzamiento estructural para dar cumplimiento a la Norma NSR-10, se recomienda la DEMOLICIÓN de los pisos dos y tres y el REFORZAMIENTO estructural del primer piso, el cual puede llegar a ser habitado por la propietaria.  
La demolición deberá ser llevada a cabo en forma manual por personal idóneo, cumpliendo la normatividad vigente.  
Dicha ejecución deberá iniciarse al día siguiente de hacerse efectivo el desalojo.  
Una vez verificado el cumplimiento o incumplimiento de la orden, en caso de incumplimiento, se dará aplicación al Parágrafo 3° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016: "Si el infractor o perturbador no cumple la orden de Policía o la medida correctiva, la autoridad de Policía competente, por intermedio de la entidad correspondiente, podrá ejecutarla a costa del obligado, si ello fuere posible. Los costos de la ejecución podrán cobrarse por la vía de la jurisdicción coactiva"





7. Articular con las dependencias correspondientes para poder generar el desalojo de la señora TERESA SÁNCHEZ JARAMILLO sin generar afectaciones a sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad y de adulta mayor.
8. Articular con las dependencias correspondientes para verificar los elementos a tener en cuenta para generar la demolición del inmueble sin generar afectaciones a los predios colindantes con el bien sobre el cual recae la medida.
9. Fijar fecha para la ejecución de la medida correctiva de demolición para el MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2022 a las 9:00 A.M.
10. Realizar la diligencia el MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2022, encontrándose la siguiente situación:





Una vez verificadas las partes y la información del proceso, así como después de haber brindado toda la información relacionada con la diligencia, se da paso al desarrollo de la misma en los siguientes términos:

Se evidencia que la ejecución de la medida coercitiva de demolición ya está en desarrollo. Aparentemente debe haber varios días.

El despacho deja constancia de que efectivamente la orden ya estaba dada y lo que se encontraba pendiente era la ejecución en las condiciones dadas en la denegación del proceso y por las dependencias competentes: Secretaría de Infraestructura - Dirección operativa de Control Físico.

Encontrando entonces que la medida de demolición ya está en ejecución, se termina la diligencia por parte de la Inspección.

Es decir, conforme la Ley 1801 de 2016, el MUNICIPIO DE PEREIRA cumplió con la totalidad de las etapas y obligaciones determinadas para el caso en particular, agotando cada una de ellas hasta el final del procedimiento, encontrándose que **no existe evidencia de un incumplimiento, omisión o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones legales**, pues, cada una de sus etapas debían surtir a fin de garantizar el debido proceso.

Sin embargo y en desarrollo de esta medida, una entidad diferente al MUNICIPIO DE PEREIRA realizó de manera previa la demolición del inmueble, **sin dar aviso previo a autoridad competente, la cual, de manera sorpresiva al presentarse en el inmueble en la fecha establecida para ejecutar la orden, se encontró con la sorpresa que el MINISTERIO DE DEFENSA y la POLICÍA NACIONAL ya la habían ejecutado. El MUNICIPIO DE PEREIRA actuó en el marco de la legalidad a través**



**de la inspección 15 de policía; en donde se le garantizaron los derechos a la querellada; no obstante la conclusión no era otra que la demolición del predio.**

Por lo anterior, solicito muy comedidamente Señor Juez, **SETENGA POR PROBADA LA PRESENTE EXCEPCIÓN** y que, como consecuencia de lo anterior, se desvincule a mi prohijado del presente trámite.

**INEXISTENCIA DE UNA CONDUCTA POR ACTIVA O PASIVA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DEMANDADA ( MUNICIPIO DE PEREIRA) QUE HAYA TENIDO INCIDENCIA CAUSAL EN EL PRESUNTO DAÑO ANTIJURÍDICO SUFRIDO POR LOS DEMANDANTES**

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.<sup>3</sup> La falla en el servicio ha sido el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado.

En el presente caso se pretende imputar jurídicamente al estado la responsabilidad por supuestos perjuicios morales, por afectación relevante a bienes o derechos convencional o constitucionalmente amparados por la extralimitación de funciones y falsos señalamientos por la parte demandada y por los daños a la salud. Se argumenta que el Municipio de Pereira se extralimitó al mostrar hechos que no correspondían a la realidad y realizar graves señalamientos que afectaron a los demandantes que contribuyeron a la materialización del hecho y por tanto al daño antijurídico que deberá ser indemnizado.

---

<sup>3</sup> Artículo 90, Constitución Política de Colombia, 1991.



Sin embargo, es importante indicar que los argumentos expuestos por la parte demandante carecen de fundamento fáctico o jurídico: No se encuentra demostrado que la actuación del MUNICIPIO DE PEREIRA fuese determinante para la materialización del daño, dado que, no se encuentra probada la intervención del Alcalde de la ciudad y en segundo lugar, y así se encontrara probado, él mismo actuó teniendo en cuenta la legítima confianza en virtud del trabajo o funciones asignadas al MINISTERIO DE DEFENSA y la POLICÍA NACIONAL. Es importante aclarar y resaltar que la orden de demolición no la dio el Alcalde; la dio la inspección 15 de policía, la misma que no se pudo ejecutar porque una Entidad administrativa diferente ordenó y finalmente ejecutó la orden.

Conforme lo ha indicado el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA – DESCONGESTIÓN, Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 25000-23-24-000-2009-00348-01:

*El principio de confianza legítima consiste en la expectativa genuina que alberga el particular, de que las reglas establecidas por el Estado para el ejercicio de una actividad o el reconocimiento de un derecho no sean variadas súbitamente. De acuerdo con ello, este principio se ve defraudado cuando la autoridad produce un cambio abrupto en sus comportamientos y decisiones, cambio que resquebraja la esperanza legítima que el administrado se ha fijado.” Así mismo, el referido principio ha sido desarrollado como un mecanismo que permite conciliar el conflicto entre los intereses público y privado en aquellos casos en los cuales la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Sin embargo, debe aclararse que la confianza o la buena fe de los administrados no*





*se protegen garantizando la estabilidad de actos u omisiones contrarios al ordenamiento jurídico, pues precisamente, el interés general se presenta como un límite imponiendo el deber a la administración de enderezar los actos u omisiones irregulares, sin atropellar los derechos fundamentales de los asociados, tales como el debido proceso administrativo, para lo cual, por ejemplo, resultaría idóneo otorgar un período razonable de transición a los particulares, con el fin de que los mismos adecuen sus actuaciones conforme al ordenamiento jurídico. En otras palabras, la confianza legítima no puede alegarse para salvaguardar actuaciones que han sido expresamente proscritas por la ley. (...) Por su parte, el principio de la seguridad jurídica también ostenta rango constitucional el cual ha sido derivado, por la Corte Constitucional, del preámbulo de la Constitución y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta, en términos generales supone una garantía de certeza la cual acompaña otros principios y derechos en el ordenamiento, como el de confianza legítima y buena fe.*

En este sentido, se tiene que, en caso de encontrarse probado el hecho alegado por la parte demandante respecto a las declaraciones sobre el “falso positivo”, estas se dieron en virtud de la confianza que el MUNICIPIO DE PEREIRA tiene hacia las demás entidades que conforman el Estado Colombiano, especialmente, respecto a los procedimientos y hallazgos de la POLICÍA NACIONAL. Conforme los principios de buena fe y buena fe administrativa, existe un deber de confianza de las autoridades hacia las instituciones que conforman el Estado Colombiano, especialmente si se trata del MINISTERIO DE DEFENSA y la POLICÍA NACIONAL.

En este sentido, no es posible determinar que la actuación del MUNICIPIO DE PEREIRA fue la causa eficiente en la causación de los daños alegados, pues fue la POLICÍA



NACIONAL y el MINISTERIO DE DEFENSA los que determinaron que allí se generaba el expendio de estupefacientes y en supuesto, generaron el montaje indicado.

Por lo anterior, solicito muy comedidamente Señor Juez, **SETENGA POR PROBADA LA PRESENTE EXCEPCIÓN** y que, como consecuencia de lo anterior, se desvincule a mi prohijado del presente trámite.

**Respecto al elemento de nexo de causalidad:**

**CONCAUSALIDAD DE CONDUCTAS POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL –  
MINISTERIO DE DEFENSA EN LA ATRIBUCIÓN DEL PRESUNTO DAÑO  
ANTI JURIDICO**

Las actuaciones realizadas por terceros en principio no le son imputables al Estado. Sin embargo, para que el daño proveniente de actuaciones exógenas le sea imputable a título de falla en el servicio, es necesario que este haya participado directa o indirectamente en la producción del hecho dañoso o que, aunque no hubiere intervenido en su generación, esta le haya sido previsible y resistible y no haya adoptado las medidas necesarias encaminadas a mitigar el mismo.

Frente a este último aspecto, cobra especial relevancia el contexto. Las circunstancias que rodean o anteceden al hecho previenen los factores internos y externos que pudieron haber tenido incidencia en el mismo y consecuentemente sirven para demostrar el posible conocimiento anticipado que los agentes deben haber tenido sobre la situación.



Al respecto, el Consejo de Estado se ha pronunciado al decir que *“en el marco de la responsabilidad del Estado por actos violentos provocados por terceros, se debe identificar claramente el contexto en sus tres dimensiones: i) contexto distal que refiere a la existencia de unas causas subyacentes y estructurales; ii) contexto proximal, entendido como el nivel de exposición a presiones variables provenientes de la primera dimensión contextual y, iii) contexto situacional, relacionado con el grado de sensibilidad al riesgo o fragilidad evidente. Estas tres dimensiones, en conjunto hacen previsible la exposición a un riesgo exponencial o extraordinario, a partir del cual se debe analizar la diligencia debida o, en su defecto, la negligencia u omisión constitutiva de la falla del servicio(...)”*<sup>4</sup>

En este sentido, es necesario identificar cada uno de estos elementos integrantes del contexto con el fin de evidenciar el grado de vulnerabilidad que tuvieron los demandantes frente al hecho generado por el tercero, vislumbrado de esta manera el cumplimiento o no del deber de cuidado y protección que tuvo la Alcaldía en el caso concreto:

1. **Contexto distal:** la primera dimensión hace referencia a la existencia de causas subyacentes, previas y estructurales, es decir, las circunstancias sociales, políticas y culturales del lugar donde sucedieron los hechos. Para el caso, se tiene que, para la fecha de ocurrencia de los hechos, se encontraba adelantándose a través de la INSPECCIÓN 15 MUNICIPAL DE POLICÍA DE PEREIRA proceso VERBAL SUMARIO por AMENAZA DE RUINA, con fecha fijada para la ejecución de la decisión adoptada después de agotar todos los trámites determinados por la ley para tal fin.

---

<sup>4</sup> Consejo de Estado, sección tercera subsección B, sentencia del 03 de agosto de 2017, Número radicado: 70001-23-31-000-2001-01159-01, C.P Ramiro Pazos Guerrero.



De manera paralela y sin conocimiento del MUNICIPIO DE PEREIRA, el MINISTERIO DE DEFENSA y la POLICIA NACIONAL, determinaron que el bien inmueble era lugar de expendió de drogas, convocando y recaudando material fotográfico para conocimiento de la comunidad.

2. **Contexto proximal:** esta dimensión se refiere a la presión ejercida por elementos variables que causen un efecto de progresión de la vulnerabilidad del individuo. Estos elementos no se encontraron presentes dado que no hay registro de hechos previos o situaciones que se pudieran desarrollar y concretar riesgos mayores. La inexistencia de amenazas, avisos o hechos preparatorios por parte del MINISTERIO DE DEFENSA y la POLICIA NACIONAL verificables que dieran lugar a inferir razonablemente la posible realización de un delito dentro de las instalaciones del inmueble objeto de la presente acción.
3. **Contexto situacional:** esta dimensión del contexto ha sido añadida por la jurisprudencia debido a que, si bien es cierto que las dos dimensiones anteriores permiten determinar los deberes de protección y peligros aleatorios a los que está expuesto un individuo, solo brindan contexto frente a una realidad ampliada, insuficiente a la hora de determinar la realidad concreta y vulnerabilidad real a la que está expuesto.

En cuanto a este elemento, el Consejo de Estado ha dicho que *“De esta forma aparece, por extensión, el tercer elemento, que aun cuando en estricto sentido no pertenece al contexto, emana de éste; se trata de, iii) el grado de sensibilidad del individuo o del grupo a las causas subyacentes y las presiones existentes en un contexto dado, (...). Ello implica estableceren “cuestión de grado”, la sensibilidad*





del sujeto a los dos primeros factores (causas subyacentes y presiones) y si su grado de vulnerabilidad supone (o no) la existencia de un riesgo extraordinario que genere obligaciones positivas reforzadas por parte del Estado de cara a las exigencias constitucionales y convencionales”<sup>5</sup>(cursiva y subrayado por fuera del texto original).

Para el caso en cuestión, la exposición al riesgo implícito en las dos dimensiones anteriores no era relevante. Por consiguiente, el grado de vulnerabilidad de los demandantes, era bajo.

Si bien, la evaluación del contexto no permite atribuir la responsabilidad del MUNICIPIO DE PEREIRA, si permite determinar el grado de vulnerabilidad, y este a su vez, la previsibilidad de los hechos y consecuente omisión en la implementación de los deberes de protección. En otras palabras, el contexto no determina la falla en el servicio, sino la posible omisión en la actividad del Estado.

De manera global, el contexto que precedió a la demolición del inmueble ubicado en el BARRIO LA LIBERTAD, no contenía elementos de afectación a la seguridad graves que permitirán a la administración a través de las entidades y dependencias correspondientes prever la ocurrencia del hecho.

Por lo anterior, solicito muy comedidamente Señor Juez, **SETENGA POR PROBADA LA PRESENTE EXCEPCIÓN** y, que, como consecuencia de lo anterior, se desvincule a mi prohijado del presente trámite.

---

<sup>5</sup> Consejo de Estado, sección tercera subsección B, sentencia del 03 de agosto de 2017, Número radicado: 70001-23-31-000-2001-01159-01, C.P Ramiro Pazos Guerrero.



## JUICIO CAUSAL / AUSENCIA DE CAUSA EFECTIVA DEL DAÑO ATRIBUIBLE AL MUNICIPIO DE PEREIRA

Taly como se determinó en los fundamentos de la defensa, para que exista un nexo de causalidad, es menester probar que la falla del servicio sea la **causa eficiente** de la causación del daño alegado. El Consejo de Estado, se ha referido al respecto indicado que<sup>6</sup>:

*El NEXO DE CAUSALIDAD se ha definido como aquella relación natural o jurídica que existe entre una conducta nociva y el daño. (...) “La Sección Tercera del Consejo de Estado, ha determinado éste vínculo, la mayoría de las veces, teniendo en cuenta dos teorías: la de la equivalencia de las condiciones y, más recientemente, la teoría de la causalidad adecuada, la primera, referida a que toda condición anterior al resultado nocivo, es causa del mismo, siempre y cuando, de no haberse presentado ésta no se daría el resultado, lo que traía el problema de generar una regresión al infinito (por ejemplo, en la muerte causada por arma de fuego, aún el vendedor del arma sería causa de ésta) y, la segunda, según la cual, es causa del daño aquella condición que en un juicio ex-ante, se determina como la causa más probable-eficiente y determinante del daño (teoría basada en las reglas de la probabilidad); una diferencia muy*

---

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 2 de agosto de 2006, Exp. 2500023240002005-(AG-0495)-01, Sección Tercera, M.P. Ramiro Saavedra Becerra. La Sala aclaró en esta providencia que, en el ejemplo que citó la Corte Constitucional en la Sentencia C- 569 de 2004, relacionado con la afectación de los intereses de los consumidores por productos defectuosos y según el cual si se hacía una imputación puramente fáctica, existían tantos nexos de causalidad como contratos, por lo que no podría hablarse de condiciones uniformes respecto de una misma causa y no quedarían protegidos estos intereses por la acción de grupo, ello no se debe a un enfoque fáctico del nexo, sino a una mala identificación de las causas de un daño, pues, por el contrario, fácticamente la mala producción del bien también sería causa del daño.



*notada entre estas dos teorías radica en que la primera trata el nexo causal de forma esencialmente fáctica, pues mira directamente TODAS las condiciones anteriores al daño, mientras que la causalidad adecuada permite tener un enfoque más jurídico frente a este fenómeno.*

Se puede determinar que el MUNICIPIO DE PEREIRA no participó en la causa eficiente y determinante del presunto daño alegado, dado que, después de evacuadas las etapas en el proceso policivo y garantizado el derecho de defensa y contradicción - dado que se le garantizó a la querellada el derecho de defensa y contradicción y que dicha decisión nunca fue anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni frente a la misma se interpuso recurso de apelación- finalmente se señaló que la vivienda debía demolerse.

Sin embargo, lo que sucedió es que fue otra autoridad administrativa la que finalmente dio la orden y la ejecutó, pero el resultado iba ser exactamente el mismo. Sin embargo, la **causa eficiente** de la causación del supuesto daño alegado no fue la ejecución de la orden de demolición, sino que, fue que la POLICIA NACIONAL y el MINISTERIO DE DEFENSA intervinieron en el proceso sin previamente haber si quiera avisado a la autoridad competente (INSPECTOR 15 MUNICIPAL DE PEREIRA) y, en supuesto, dieron declaraciones falsas en rueda de prensa y realizaron el montaje que hoy se debate.



## **EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE AL DAÑO Y LOS PERJUICIOS**

### **FALTA DE ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA Y CRITERIOS DE LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO INMATERIAL EN SU MODALIDAD DE PERJUICIOS MORALES**

El Consejo de Estado, unificó criterios respecto al reconocimiento y liquidación de los perjuicios morales, por medio de sentencia del 28 de agosto de 2014, en proceso con radicado 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251) y Magistrado Ponente JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, indicado que:

*Procede la Sala a unificar la jurisprudencia en materia de reparación de perjuicios inmateriales; lo anterior, por cuanto la Sección considera necesario y oportuno determinar los criterios generales que se deben tener en cuenta para la liquidación del mencionado perjuicio. (..) Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo. En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así: Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización*





*equivalente al 50% del tope indemnizatorio. Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio. Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio. Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio. (...) Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva. (...) En casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los eventos anteriores, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios antes señalados. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.*

En este sentido, puede observarse que la parte demandante solicita el pago de los perjuicios morales, tasándolos de la siguiente manera:



Nombre	Calidad frente a la Víctima	Valor Solicitado
Masa sucesoral de la señora Teresa Sánchez	Víctima directa	300 SMLMV
Armando Sánchez	Víctima directa	200 SMLMV
Maria Leticia Guerrero Melchor	Compañera permanente de armando	100 SMLMV
Carlos Andrés Sánchez Guerrero	Hijo de Armando	100 SMLMV
Maria Camila Sánchez Obando	Nieta	100 SMLMV
Luz Nancy Guerrero Melchor	Cuñada	100 SMLMV
Valentina Guerrero Melchor	Sobrina política	50 SMLMV

Como se puede observar, las sumas solicitadas como reconocimiento por la parte demandada son superiores a los topes indicados por el Consejo de Estado; en este sentido, es menester enumerar las razones por las cuales no es posible el reconocimiento del indicado perjuicio:

1. No se encuentra demostrado para ninguno de los integrantes, en cada uno de sus respectivos niveles, que las circunstancias que rodearon la ocurrencia del hecho hubiesen sido ocasionadas por una acción u omisión del servicio estatal, como se puede observar en el planteamiento de las anteriores excepciones.
2. Las sumas solicitadas no se encuentran razonadamente liquidadas: no se indicaron los criterios para su tasación ni los factores para determinar su exigibilidad; así mismo, exceden los topes establecidos por el Consejo de Estado.



3. No existe prueba del dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invadieron a las supuestas víctimas directa o indirectas, especialmente **teniendo en cuenta las deplorables condiciones en las que habitaba la señora TERESA su hogar, casi en ruinas y la falta de ayuda de sus familiares al momento de necesitarse su colaboración antes, durante y después del proceso policivo, puesto que, en virtud de la falta de ayuda de los mismos, se debió llegar a la determinación de alojar a la señora TERESA en un hogar para ancianos, dado que ninguno de sus familiares quiso hacerse caso de ella.**

El lamentable estado en que vivía la señora TERESA (Q.E.P.D) y la falta de interés de su núcleo familiar que se puede observar fácilmente en el expediente, además de que no hay pruebas más allá de una denuncia penal y unos testimonios con los cuales se pretende establecer la intensidad del daño; pero lo cierto es que no emana del expediente pruebas fehacientes que den cuenta al juzgador de la intensidad del presunto daño moral alegado. Llama la atención que únicamente sienten el dolor familiar únicamente en el presente proceso; sin embargo, durante la vida de la causante, se puede observar con facilidad que no existió lazo alguno o voluntad para brindarle una mejor calidad de vida.

Lo anterior se corrobora con el informe psicológico por emergencias rendido por la profesional LINA CALVO en el marco del proceso administrativo que adelantó el Municipio; y de dicho informe se resalta lo siguiente:

- 1.- La señora TERESA (Q.E.P.D) para la época anterior a su deceso tenía la edad de 89 años; un estado avanzado de edad; de donde se desprende su vulnerabilidad.

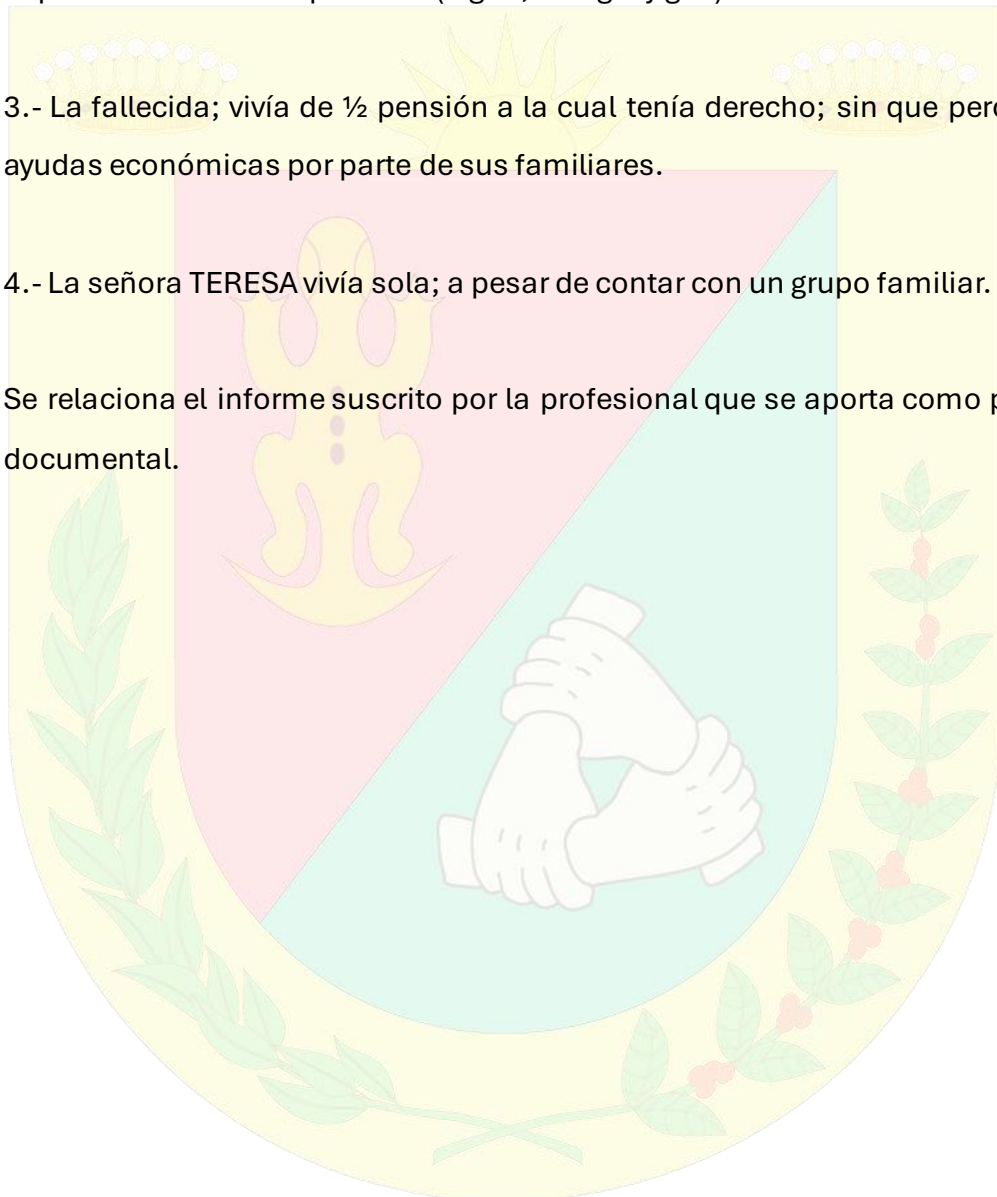


2.- Se dejó constancia de las deplorables condiciones físicas y locativas en que vivía la señora TERESA; eran tan deplorables las condiciones que no contaba ni siquiera con servicios públicos ( agua, energía y gas).

3.- La fallecida; vivía de  $\frac{1}{2}$  pensión a la cual tenía derecho; sin que percibiera ayudas económicas por parte de sus familiares.

4.- La señora TERESA vivía sola; a pesar de contar con un grupo familiar.

Se relaciona el informe suscrito por la profesional que se aporta como prueba documental.







#### DATOS DE QUIEN ELABORA EL SEGUIMIENTO

**Nombre:** Lina Marcela Calvo Ocampo

**Profesión:** Psicóloga

**T.P:** 202110

**Fecha del seguimiento:** 21 y 22 de junio del 2021

#### DATOS DEL JEFE DE FAMILIA A QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO

N°	NOMBRE	TENENCIA			C.C	DIRECCIÓN DE VISITA	TELÉFONO	BARRIO	RESULTADO DE VISITA
		Prop	Arre	Pos					
1	TERESA SANCHEZ	X			24.891.845	CLLE 11 # 5 - 16	3125515538	BAVARIA ALTA	EXITOSA

#### CONTEXTO FAMILIAR

**Nombre del jefe de familia:** Teresa Sánchez

**Dirección de la vivienda afectada:** Calle 11 # 5 - 16

**Barrio:** Bavaria parte alta

**Tenencia:** Propietario

**Característica del grupo familiar:** Doña Teresa actualmente habita la casa sola. Su único hijo vive cerca con algunos familiares los cuales permanecen en contacto con ella pero en general la Señora Teresa es la que con su pensión cubre sus necesidades.

**Población vulnerable:** Adulta mayor de 89 años de edad.

**Relación de ingresos:** Los ingresos de la Señora Teresa dependen de la media pensión del estado.

**Observaciones:** El día 21 de junio nos recibe la visita Doña Teresa en la vivienda vecina de sus familiares. Durante la visita se observa además de las malas condiciones de la vivienda, las malas condiciones en las cuales vive Doña Teresa, la cual es una adulta mayor y no cuenta con redes de apoyo que le den



Version:

Fecha de Vigencia:

alojamiento, si bien algunos de sus familiares le ayudan, no cuenta con recursos para mejorar las condiciones de la vivienda ni para suplir sus necesidades básicas. Doña Teresa manifiesta que no tiene dificultades de salud, que vive sola hace mucho tiempo en la vivienda afectada y que su mayor preocupación es tener que vivir en un hogar geriátrico.

El mismo día se realiza revisión de la vivienda por parte del ingeniero estructural Carlos Héctor García y en compañía del técnico Santiago Velázquez se le manifiesta a Doña Teresa y su hijo Armando las condiciones de la vivienda y los conceptos de los ingenieros de la DIGER, aclarándoles la necesidad de evacuar la vivienda debido a que esta no cumple con las condiciones mínimas de seguridad para vivir, además de no contar con los servicios básicos como lo son agua y energía para que Doña Teresa pueda tener una buena calidad de vida en la casa. Debido a esto sus familiares le ayudan con el agua pero esto no es suficiente para mejorar su situación.

El día 22 de junio se realiza nuevamente otra visita en compañía del ingeniero Argemiro Mosquera y psicóloga Ángela Penagos quienes nuevamente les explicaron su situación y además se les ofrece un Subsidio de arrendamiento temporal de 3 meses para facilitar la evacuación, pero tanto Doña Teresa como su hijo manifiestan no querer tomar el subsidio debido a que eso no les soluciona a ellos el problema. De igual forma se les deja la documentación pertinente como lo son el concepto de evacuación y el formato de solicitud de subsidio de arrendamiento en caso de que cambien de parecer. Se diligencia acta de reunión donde se expresa claramente la situación y es firmada por todos los presentes en la reunión.

Por lo anterior, solicito muy comedidamente Señor Juez, **SE TENGA POR PROBADA LA PRESENTE EXCEPCIÓN SE TENGA POR PROBADA LA PRESENTE EXCEPCIÓN** y que, como consecuencia de lo anterior, se desvincule a mi prohijado del presente trámite.

**FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO INMATERIAL EN SU MODALIDAD DE AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS**

Así mismo, el Consejo de Estado, unificó criterios respecto al reconocimiento y liquidación de los perjuicios por violación a la protección de bienes constitucionales o convencionales, por medio de sentencia del 28 de agosto de 2014, en proceso con radicado 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251) y Magistrado Ponente JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA:



*De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1° de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”. (...) En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocido con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.*

En este sentido, puede observarse que la parte demandante solicita el pago de los perjuicios morales, tasándolos de la siguiente manera:



Nombre	Calidad frente a la Víctima	Valor Solicitado
Masa sucesoral de la señora Teresa Sánchez	Víctima directa	300 SMLMV
Armando Sánchez	Víctima directa	200 SMLMV
Maria Leticia Guerrero Melchor	Compañera permanente de armando	100 SMLMV
Carlos Andrés Sánchez Guerrero	Hijo de Armando	100 SMLMV
Maria Camila Sánchez Obando	Nieta	100 SMLMV
Luz Nancy Guerrero Melchor	Cuñada	100 SMLMV
Valentina Guerrero Melchor	Sobrina política	50 SMLMV

Como se puede observar, las sumas solicitadas como reconocimiento por la parte demandada son superiores a los topes indicados por el Consejo de Estado y están siendo reclamadas por personas que no se encuentran legitimadas para exigir su pago, pues, como se indicó, esta sólo puede ser reclamada por la víctima directa.

Así mismo, se observa que el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, indicó tres elementos necesarios para el reconocimiento de este perjuicio y que no se encuentran acreditados en el proceso, tal y como se indica a continuación:

1. **La afectación a un bien jurídico constitucional o convencionalmente reconocido.** Conforme se expuso con anterioridad, no existe certeza respecto al hecho que dio origen a los daños alegados; así mismo, no existe hilo que vincule al MUNICIPIO DE PEREIRA tanto con el hecho y el daño alegado. En este caso, tampoco se encuentra plenamente probada la afectación a bienes convencional o constitucionalmente tutelados, pues no se especifica claramente y de manera detallada los hechos que generaron dichas afectaciones.





2. **Que esta afectación haya sido relevante.** Así mismo, no se encuentra demostrado que la actuación del MUNICIPIO DE PEREIRA haya sido determinante y, por ende, que los daños alegados por la parte se deriven de una acción u omisión de la entidad; los daños indicados no son endilgadles a mi representado y no se demuestra que la víctima no pueda continuar disfrutando plena y legítimamente sus derechos constitucionales y convencionales.
3. **Que no se solicite el pago de perjuicios por concepto de daño a la salud.** La parte demandante, además, pretende el reconocimiento de perjuicios por concepto de daño a la salud, situación que se encuentra prohibida conforme a la jurisprudencia.
4. No se encuentra acreditado el daño, especialmente **teniendo en cuenta las deplorables condiciones en las que habitaba la señora TERESA su hogar, casi en ruinas y la falta de ayuda de sus familiares al momento de necesitarse su colaboración antes, durante y después del proceso policivo, puesto que, en virtud de la falta de ayuda de los mismos, se debió llegar a la determinación de alojar a la señora TERESA en un hogar para ancianos, dado que ninguno de sus familiares quiso hacerse caso de ella.**

El lamentable estado en que vivía la señora TERESA (Q.E.P.D) y la falta de interés de su núcleo familiar que se puede observar fácilmente en el expediente, además de que no hay pruebas más allá de una denuncia penal y unos testimonios con los cuales se pretende establecer la intensidad del daño; pero lo cierto es que no emana del expediente pruebas fehacientes que den cuenta al juzgador de la intensidad del presunto daño alegado. Llama la atención que



únicamente sienten el dolor familiar únicamente en el presente proceso; sin embargo, durante la vida de la causante, se puede observar con facilidad que no existió lazo alguno o voluntad para brindarle una mejor calidad de vida.

Lo anterior se corrobora con el informe psicológico por emergencias rendido por la profesional LINA CALVO en el marco del proceso administrativo que adelantó el Municipio; y de dicho informe se resalta lo siguiente:

- 1.- La señora TERESA ( Q.E.P.D) para la época anterior a su deceso tenía la edad de 89 años; un estado avanzado de edad; de donde se desprende su vulnerabilidad.
- 2.- Se dejó constancia de las deplorables condiciones físicas y locativas en que vivía la señora TERESA; eran tan deplorables las condiciones que no contaba ni siquiera con servicios públicos ( agua, energía y gas).
- 3.- La fallecida; vivía de ½ pensión a la cual tenía derecho; sin que percibiera ayudas económicas por parte de sus familiares.
- 4.- La señora TERESA vivía sola; a pesar de contar con un grupo familiar.

Se relaciona el informe suscrito por la profesional que se aporta como prueba documental.



Por lo anterior, solicito muy comedidamente Señor Juez, **SE TENGA POR PROBADA LA PRESENTE EXCEPCIÓN SE TENGA POR PROBADA LA PRESENTE EXCEPCIÓN** y que, como consecuencia de lo anterior, se desvincule a mi prohijado del presente trámite.

**FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO INMATERIAL EN SU MODALIDAD DE**  
**DAÑO A LA SALUD**

Conforme sentencia del veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015), el Consejo de Estado, en proceso con radicación 250002326000200300863 01 (33.302) y con MP. HERNÁN ANDRADE RINCÓN, indicó que respecto a este perjuicio:

*En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia -antes denominado daño a la vida de relación- precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.*

*Frente a la liquidación del daño a la salud, la Sala reitera los lineamientos planteados en sentencia del 28 de agosto del año en curso, en la que se unificó la jurisprudencia en relación a la tasación, en los siguientes términos:*

*Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, exps. 19031 y 38222 proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo, en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que*



*esté debidamente motivado, todo ello con aplicación del prudente juicio del juez, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida.*

Como se observa, el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo ha indicado que:

1. El reconocimiento de perjuicios por daño a la salud, excluye las demás categorías de perjuicios inmateriales, a excepción del daño moral.
2. Se deben tener en cuenta que la regla indemnizatoria es de 10 a 100 SMMLV, debiéndose tener en cuenta la gravedad y la naturaleza de la lesión.
5. No se encuentra acreditado el daño, especialmente **teniendo en cuenta las deplorables condiciones en las que habitaba la señora TERESA su hogar, casi en ruinas y la falta de ayuda de sus familiares al momento de necesitarse su colaboración antes, durante y después del proceso policivo, puesto que, en virtud de la falta de ayuda de los mismos, se debió llegar a la determinación de alojar a la señora TERESA en un hogar para ancianos, dado que ninguno de sus familiares quiso hacerse caso de ella.**

El lamentable estado en que vivía la señora TERESA (Q.E.P.D) y la falta de interés de su núcleo familiar que se puede observar fácilmente en el expediente, además de que no hay pruebas más allá de una denuncia penal y unos testimonios con los cuales se pretende establecer la intensidad del daño; pero lo cierto es que no emana del expediente pruebas fehacientes que den cuenta al juzgador de la intensidad del presunto daño alegado. Llama la atención que





Versión: 01

Fecha de vigencia: Enero 17 de 2024

únicamente sienten el dolor familiar únicamente en el presente proceso; sin embargo, durante la vida de la causante, se puede observar con facilidad que no existió lazo alguno o voluntad para brindarle una mejor calidad de vida.

En el caso en concreto se puede observar que la parte demandante no tiene en cuenta los anteriores conceptos, pues, solicita el pago de múltiples daños inmateriales y así mismo, de manera desproporcional a los supuestos daños producidos.

Se itera entonces, no existe nexo causal entre los hechos y las lesiones alegadas por la parte; no existe acción u omisión de parte del MUNICIPIO DE PEREIRA con el cual se le pueda imputar la falla del servicio y, por tanto, no es posible generar reconocimiento por los emolumentos solicitados por la parte demandante.

Por lo anterior, solicito muy comedidamente Señor Juez, **SE TENGA POR PROBADA LA PRESENTE EXCEPCIÓN SE TENGA POR PROBADA LA PRESENTE EXCEPCIÓN** y que, como consecuencia de lo anterior, se desvincule a mi prohijado del presente trámite.

**GENERICA**

Solicito señor Juez que declare cualquier otra excepción que encuentre probada dentro del proceso con base en los documentos y demás pruebas aportadas.



## **V. PRUEBAS**

### **DOCUMENTALES QUE SE APORTAN CON LA DEMANDA:**

1.- En cumplimiento del Artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, me permito anexar el expediente administrativo que fue remitido previamente al juzgado en cumplimiento realizado mediante el auto admisorio de la demanda.

De igual forma, quedamos atentos a cualquier requerimiento que el despacho tenga en cuanto al expediente administrativo de la demandante.

2.- Derechos de petición dirigidos a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CIUDAD FUTURO, NUEVA EPS, DIAN y DATACRÉDITO con su correspondiente constancia de remisión.

### **DE OFICIO:**

1. Conforme al artículo 78 del C.G.P. donde se indica que son deberes de las partes y sus apoderados: ... 10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir, y conforme al derecho de petición y su constancia de radicación ante la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, solicito muy comedidamente que en caso de no recibir respuesta a la mencionada petición se ordene de oficio dirigido a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que se sirva informar el estado actual de la denuncia penal interpuesta por uno de los demandantes por presuntas “amenazas” ya por si procesalmente es posible los elementos materiales probatorios que se han recaudado.



2. Conforme al artículo 78 del C.G.P. donde se indica que son deberes de las partes y sus apoderados: ... 10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir, y conforme al derecho de petición y su constancia de radicación ante el hogar para ancianos **CIUDAD FUTURO** ubicada en la Bananera la Florida, donde estuvo la señora TERESA ( Q.E.P.D) para que informe el tiempo que estuvo, cuanto pagó, quien pagó y cuáles fueron los familiares que se hicieron cargo o si el pago fue por un subsidio del Municipio de Pereira.
3. Conforme al artículo 78 del C.G.P. donde se indica que son deberes de las partes y sus apoderados: ... 10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir, y conforme al derecho de petición y su constancia de radicación ante la NUEVA EPS a fin de verificar la afiliación del señor ARMANDO SÁNCHEZ a la NUEVA EPS y verificar si tenía como beneficiaria a la señora TERESA (Q.E.P.D), así mismo, que se sirva informar la dirección donde residía para la época de los hechos.
4. Conforme al artículo 78 del C.G.P. donde se indica que son deberes de las partes y sus apoderados: ... 10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir, y conforme al derecho de petición y su constancia de radicación ante la DIAN y DATACREDITO para que aporten las direcciones para la época de los hechos y seis meses antes de los demandantes.



### INTERROGATORIO DE PARTE:

Solicito se sirva citar a **la totalidad de los integrantes de la parte demandante** en el proceso de la referencia, a fin de que se sirva resolver interrogatorio de parte que permita formularle verbalmente en la respectiva audiencia, para lo cual pido se le señale fecha y hora.

### DECLARACIÓN DE TERCEROS:

Solicito que se cite a las personas que se relacionan a continuación con el fin de que indiquen lo que les conste sobre los hechos que le consten respecto a la presente controversia, en relación con las condiciones en las que se desarrolló el proceso verbal policivo, las condiciones de vida en las que se encontraba la señora TERESA JARAMILLO (Q.E.P.D), las afectaciones alegadas y demás puntos de interés.

1. ÓSCAR ANDRÉS MARÍN RAVE identificado con la C.C 9.772.905, Inspector 15 de Policía de Pereira, quien puede rendir testimonio sobre los hechos aquí narrados especialmente respecto al trámite del proceso policivo, las condiciones de vida de la señora TERESA JARAMILLO (Q.E.P.D) y lo que respecta a su cargo. Puede ubicarse es la dirección electrónica [oscarandres.marin@gmail.com](mailto:oscarandres.marin@gmail.com) o al canal institucional: [inspeccion15uppv@pereira.gov.co](mailto:inspeccion15uppv@pereira.gov.co))
2. CARLOS HÉCTOR GARCÍA quien fue el perito experto que determinó la necesidad de demolición del inmueble para la época de los hechos y quien puede rendir testimonio sobre la situación en la que se encontraba la señora TERESA SÁNCHEZ JARAMILLO y las condiciones en las que se encontraba la





vivienda objeto del presente litigio. El testigo puede ubicarse a través de este apoderado judicial.

3. LINA MARIA CALVO OCAMPO quien fue Psicóloga encargada del seguimiento del proceso para lo época de los hechos, y quien puede rendir testimonio sobre la situación en la que se encontraba la señora TERESA SÁNCHEZ JARAMILLO y las condiciones en las que se encontraba la vivienda objeto del presente litigio además de lo relacionado con el informe psicológico que rindió en el proceso administrativo. El testigo puede ubicarse a través de este apoderado judicial.
4. ANDRÉS DAVID RAMÍREZ JARAMILLO quien fue el Comisario de Familia a cargo del caso para la época de los hechos, y quien puede rendir testimonio sobre la situación en la que se encontraba la señora TERESA SÁNCHEZ JARAMILLO y las condiciones en las que se encontraba la vivienda objeto del presente litigio. El testigo puede ubicarse a través de este apoderado judicial.
5. DARCIO MENA ROBLEDO quien fue el Personero Delegado para la Mujer, NNAS, Adulto mayor para la época de los hechos, y quien puede rendir testimonio sobre la situación en la que se encontraba la señora TERESA SÁNCHEZ JARAMILLO y las condiciones en las que se encontraba la vivienda objeto del presente litigio. El testigo puede ubicarse a través de este apoderado judicial.
6. DAVID ALEJANDRO ÁNGEL LONDOÑO quien fue el Psicólogo Habitante de calle para la época de los hechos, y quien puede rendir testimonio sobre la situación en la que se encontraba la señora TERESA SÁNCHEZ JARAMILLO y las condiciones en las que se encontraba la vivienda objeto del presente litigio. El testigo puede ubicarse a través de este apoderado judicial.



7. KATHERINE RUIZ MARÍN quien fue la Auxiliar de Enfermería para la época de los hechos, y quien puede rendir testimonio sobre la situación en la que se encontraba la señora TERESA SÁNCHEZ JARAMILLO y las condiciones en las que se encontraba la vivienda objeto del presente litigio. El testigo puede ubicarse a través de este apoderado judicial.
8. DIANA VALENCIA quien fue la Psicóloga para la época de los hechos, y quien puede rendir testimonio sobre la situación en la que se encontraba la señora TERESA SÁNCHEZ JARAMILLO y las condiciones en las que se encontraba la vivienda objeto del presente litigio. El testigo puede ubicarse a través de este apoderado judicial.
9. ELIZABETH BOTERO GRAJALES quien fue la Profesional en Desarrollo Familiar para la época de los hechos, y quien puede rendir testimonio sobre la situación en la que se encontraba la señora TERESA SÁNCHEZ JARAMILLO y las condiciones en las que se encontraba la vivienda objeto del presente litigio. El testigo puede ubicarse a través de este apoderado judicial.
10. YANY PAOLA TRIVIÑO BEDOYA quien puede ser ubicada en la dirección física Manzana 23 casa 2, segundo piso del Barrio Galán de la Ciudad de Pereira, Risaralda, al número de celular 31133049230, y al buzón electrónico [yanypao.tribedoya@gmail.com](mailto:yanypao.tribedoya@gmail.com), la presente prueba el fin de que indiquen lo que les conste sobre los hechos que le consten respecto a la presente controversia, en relación con las condiciones en las que se desarrolló el proceso verbal policivo, las condiciones de vida en las que se encontraba la señora TERESA JARAMILLO (Q.E.P.D), las afectaciones alegadas y demás puntos de interés



11. NELCY LORENA GUEVARA DÍA quien puede ser ubicada en la dirección física Calle 23 # 2-29 del Barrio San Jorge de la ciudad de Pereira, Risaralda, al número de celular 3137155843 y al buzón electrónico [lorenaguevaradiaz312@hotmail.com](mailto:lorenaguevaradiaz312@hotmail.com), la presente prueba el fin de que indiquen lo que les conste sobre los hechos que le consten respecto a la presente controversia, en relación con las condiciones en las que se desarrolló el proceso verbal policivo, las condiciones de vida en las que se encontraba la señora TERESA JARAMILLO (Q.E.P.D), las afectaciones alegadas y demás puntos de interés.
12. ISRAEL DE JESÚS BEDOYA ACEVEDO quien puede ser ubicado en la dirección física Calle 13 # 5-28 del Barrio Centro de la ciudad de Pereira, Risaralda, al número de celular 3044793310 y al buzón electrónico [mundoistal@hotmail.com](mailto:mundoistal@hotmail.com), la presente prueba el fin de que indiquen lo que les conste sobre los hechos que le consten respecto a la presente controversia, en relación con las condiciones en las que se desarrolló el proceso verbal policivo, las condiciones de vida en las que se encontraba la señora TERESA JARAMILLO (Q.E.P.D), las afectaciones alegadas y demás puntos de interés.
13. DIANA CAROLINA GIRALDO ARANDIA, quien puede ser ubicada en la dirección física Manzana 7 Casa 17 Barrio la Esneda de la ciudad de Pereira, Risaralda, al número de celular 3143779221y al buzón electrónico [carolinagiraldo926@gmail.com](mailto:carolinagiraldo926@gmail.com), la presente prueba el fin de que indiquen lo que les conste sobre los hechos que le consten respecto a la presente controversia, en relación con las condiciones en las que se desarrolló el proceso verbal



policivo, las condiciones de vida en las que se encontraba la señora TERESA JARAMILLO (Q.E.P.D), las afectaciones alegadas y demás puntos de interés.

14. JOHN FREDY ESPINOSA GUARÍN, quien puede ser ubicado en la dirección física Carrera 3 # 22-32 del Barrio San Jorge de la ciudad de Pereira, Risaralda, al número de celular 3207246021, no posee correo electrónico, la presente prueba el fin de que indiquen lo que les conste sobre los hechos que le consten respecto a la presente controversia, en relación con las condiciones en las que se desarrolló el proceso verbal policivo, las condiciones de vida en las que se encontraba la señora TERESA JARAMILLO (Q.E.P.D), las afectaciones alegadas y demás puntos de interés.

15. MARY LUZ BARANDICA LOZANO, quien puede ser ubicada en la dirección física Calle 17 Bis # 8ª-19 del Barrio Laurel de la ciudad de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, al número de celular 3202524149 y al buzón electrónico [crucita1979@outlook.es](mailto:crucita1979@outlook.es), la presente prueba el fin de que indiquen lo que les conste sobre los hechos que le consten respecto a la presente controversia, en relación con las condiciones en las que se desarrolló el proceso verbal policivo, las condiciones de vida en las que se encontraba la señora TERESA JARAMILLO (Q.E.P.D), las afectaciones alegadas y demás puntos de interés.

16. REINALDO ANTONIO VILLAMIL MURILLO, quien puede ser ubicado en la dirección física Calle 11 # 5-38 del Barrio Centro de la ciudad de Pereira, Risaralda, al número de celular 3136538933 y al buzón electrónico [innovar.publicidad@hotmail.com](mailto:innovar.publicidad@hotmail.com), la presente prueba el fin de que indiquen lo que les conste sobre los hechos que le consten respecto a la presente controversia, en relación con las condiciones en las que se desarrolló el





proceso verbal policivo, las condiciones de vida en las que se encontraba la señora TERESA JARAMILLO (Q.E.P.D), las afectaciones alegadas y demás puntos de interés.

17. WILSON GEOVANI GARCÍA TORRES, identificado con a con cedula de ciudadanía No. 9.735.051, quien puede ser ubicado en la dirección física Calle 11 # 5-10 del Barrio Centro de la ciudad de Pereira, Risaralda, al número de celular 3225241799 y al buzón electrónico [wigeotor@hotmail.com](mailto:wigeotor@hotmail.com), la presente prueba el fin de que indiquen lo que les conste sobre los hechos que le consten respecto a la presente controversia, en relación con las condiciones en las que se desarrolló el proceso verbal policivo, las condiciones de vida en las que se encontraba la señora TERESA JARAMILLO (Q.E.P.D), las afectaciones alegadas y demás puntos de interés.

18. DORA GLADIS GONZÁLEZ ROJAS, identificada con a con cedula de ciudadanía No. 42.050.014, quien puede ser ubicada en la dirección física Carrera 16 #17 – 20 conjunto residencial portal de la Pradera Torre A Apartamento 603 de la ciudad de Dosquebradas, Risaralda, al número de celular 3168577058 y al buzón electrónico [doraehijos01@gmail.com](mailto:doraehijos01@gmail.com), la presente prueba el fin de que indiquen lo que les conste sobre los hechos que le consten respecto a la presente controversia, en relación con las condiciones en las que se desarrolló el proceso verbal policivo, las condiciones de vida en las que se encontraba la señora TERESA JARAMILLO (Q.E.P.D), las afectaciones alegadas y demás puntos de interés.

19. JORGE IVÁN TOBÓN CASTRO, identificado con a con cedula de ciudadanía No. 10.130.698, quien puede ser ubicada en la dirección física Carrera 16 #17 –



20conjunto residencial portal de la Pradera Torre A Apartamento 603 de la ciudad de Dosquebradas, Risaralda, al número de celular 3052654204 y al buzón electrónico [doraehijos01@gmail.com](mailto:doraehijos01@gmail.com), la presente prueba el fin de que indiquen lo que les conste sobre los hechos que le consten respecto a la presente controversia, en relación con las condiciones en las que se desarrolló el proceso verbal policivo, las condiciones de vida en las que se encontraba la señora TERESA JARAMILLO (Q.E.P.D), las afectaciones alegadas y demás puntos de interés.

#### **VI. ANEXOS**

- Poder especial debidamente conferido junto con sus anexos
- Los indicados como PRUEBAS
- Remisión de la presente contestación a los sujetos procesales.

#### **VII. NOTIFICACIONES**

**EL SUSCRITO APODERADO** recibe notificaciones en la CARRERA 7 No. 18 – 55 PISO 3, SECRETARIA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA en PEREIRA – RISARALDA.

Dirección electrónica: [eycnotificacionesjudiciales@gmail.com](mailto:eycnotificacionesjudiciales@gmail.com)

Del señor juez,

**DAVID EZERIGUER SÁNCHEZ**

**C.C No. 1.088.299.275 de Pereira**

**T.P. 255.275 del C.S. de la J.**